Señores Consejeros:

Permítanme que mis primeras palabras ante ustedes, tras tomar posesión de mi cargo, sean para decir que considero un privilegio presidir este Consejo. Es tal la calidad de sus componentes, que su reconocimiento no corre más riesgo que el de la obiedad; y son tales las posibilidades de debate, reflexión y asesoramiento que ofrece, que incurriría yo en grave despilfarro si no tratara de utilizarlas con amplitud. Sirva esto de justificación a mi deseo de exponerles, hoy, algunas consideraciones sobre los problemas que tenemos ante nosotros.

Vivimos momentos difíciles: la economía mundial esta atravesando una etapa de recesión intensa y prolongada; el proceso de integración europea ha encontrado obstáculos inesperados junto a los problemas previsibles y, en fin, nuestra economía se ve aquejada de males que no son imputables, en buena medida, al contexto internacional.

En todos estos ámbitos, las dificultades han aumentado o se han hecho más patentes a los ojos de los ciudadanos durante los dos últimos meses.

En primer lugar, la evolución económica de los grandes países industriales ha obligado a diferir las expectativas de recuperación de la economía mundial por tercera vez en un año. Ni Estados Unidos ni Japón están en condiciones de transmitir un impulso expansivo al resto del mundo en los próximos meses. En Estados Unidos, la política presupuestaria no dispone de márgenes para estimular la economía, evidenciando así las dificultades que a una recesión añade el hecho de haberse acumulado déficit públicos importantes durante la fase precedente de auge; y en ninguno de los dos países cabe esperar transmisiones rápidas y sencillas de los efectos de políticas monetarias expansivas, en vista de la mala estructura financiera de las familias, de las dificultades de los sistemas bancarios y del estado de las expectativas en el mundo de los negocios. En Europa, Alemania, cuyo proceso de unificación la había convertido en un foco de expansión durante los dos últimos años, se esfuerza por contener, por vías monetarias, los efectos inflacionistas generados por dicho proceso y, así, no sólo contiene su propia expansión sino que impide la reducción de los tipos de interés a otros países participantes en el mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo. La disparidad de condiciones coyunturales entre las economías genera incertidumbres y tensiones en los mercados cambiarios. Los últimos meses han puesto de manifiesto, en definitiva, que aún habrá que esperar bastantes meses hasta que la recesión de las economías industriales deje paso, claramente, a una recuperación.

El segundo ámbito de dificultades recientes es el de la integración europea. Tan pronto como se firmaron los acuerdos de Maastricht en febrero último, el optimismo que pareció acompañar a las negociaciones se vio sucedido por la expresión de dudas y aprensiones en diferentes países comunitarios, hasta la conmoción provocada por los resultados negativos del referéndum danés celebrado el 3 de junio pasado. Se ha señalado que lo ocurrido es consecuencia de la forma demasiado simplificada en que se ha presentado el contenido de los acuerdos, de la insistencia excesiva en sus aspectos económicos en perjuicio de su sustancia política y, en definitiva, del insuficiente esfuerzo realizado para explicar a los pueblos lo acordado. Lo cierto es que los pasos siguientes del proceso de integración europea están sometidos, en estos momentos, a elementos considerables de incertidumbre que tardarán bastantes meses en disiparse; y que tal situación ha suscitado dudas en los mercados sobre la firmeza de los procesos de convergencia en países, como España, cuyas políticas económicas aparecían ligadas al normal desarrollo de los acuerdos de Maastricht.

Finalmente, en ese contexto de incertidumbre europea y de atonía en la coyuntura mundial, la economía española ha experimentado una acentuación reciente en la pérdida de ritmo de la demanda y la actividad y el Gobierno ha manifestado que no es posible mantener el aumento rápido del déficit que venía observándose en las cuentas de las Administraciones Públicas. Se trata, en realidad, de dos fenómenos interrelacionados, porque si la economía española ha venido manteniendo, en la recesión, tasas de crecimiento superiores a las registradas en la gran mayoría de los países industriales, ello se ha debido, en buena medida, al apoyo que la demanda de bienes y servicios ha venido recibiendo -directa e indirectamente- del sector público, hasta generar un déficit de dinámica insostenible. Una parte del aumento del déficit es, sin duda, el resultado automático de la pérdida paulatina de ritmo de la economía desde 1990, que ha conducido a menores tasas de crecimiento de los ingresos impositivos y a aumentos de los gastos de transferencias; pero otra parte importante del avance registrado en el déficit público se debe a incrementos estructurales del gasto público, es decir, a aumentos del gasto independientes de la evolución de la coyuntura económica. La necesidad de corregir la tendencia acelerada del déficit público afectará, inevitablemente, a la evolución de la economía.

La coincidencia del conjunto de factores de incertidumbre y de dificultades a los que vengo refiriéndome y la toma de conciencia de su importancia en un período corto de tiempo han hecho descender sobre el país un clima de pesimismo, más allá del debate político normal. Siempre es bueno que se tome conciencia de las dificultades reales y se acepte la necesidad de corregirlas. Sin embargo, desde el Banco de España, que lleva varios años señalando la necesidad de frenar y aun reducir el déficit público, denunciando lo excesivo de las cargas que la sociedad estaba dispuesta a echar sobre los hombros del sector público sin atender a las posibilidades efectivas de financiación, insistiendo en la necesidad de someter el gasto público a un examen sobre la eficacia de su gestión y sobre su rentabilidad para el futuro y advirtiendo al país que estaba instalado en un nivel de consumo superior a sus posibilidades; desde el Banco de España, que ha cumplido ciertamente esa desagradecida función -cualesquiera que hayan podido ser sus errores-, tal vez sea posible hacer un llamamiento a la moderación del pesimismo, puesto que el país no tiene ante sí problemas que no pueda resolver en un período razonable de tiempo. El pesimismo puede generar confusión y llevar a la inacción, cuando lo que se requiere son ideas claras y decisión para abordar los problemas.

Nada puede hacer España para combatir la recesión mundial, pero debe poner su economía en orden para poder beneficiarse de la recuperación cuando ésta llegue. Como miembro de la Comunidad, mayores son sus posibilidades de contribuir al hallazgo de soluciones a los problemas que están, hoy, planteados en el proceso de la integración europea; y habrá de hacerlo con claridad respecto de sus aspiraciones e intereses y con una comprensión correcta del origen de las restricciones que la integración comunitaria señala a su política económica y, de modo más general, al comportamiento de sus agentes económicos.

La integración comunitaria es un proceso fundamentalmente político, aunque en su base se encuentre el intento de ofrecer respuestas a problemas comunes que cada país no puede ya resolver por sí mismo y que son, en buena medida, problemas económicos y tecnológicos. Creo que ésta es la intuición básica que explica la práctica unanimidad con la que el pueblo español respaldó nuestro ingreso en la Comunidad. Es también un proceso complejo y lento, distante de cualquier pretensión de avance lineal, en un tiempo previsible, hacia una unión federal clásica. Los acuerdos de Maastricht son una pieza importante en ese proceso político, pero una pieza susceptible de distintas interpretaciones y desarrollos en una Europa en la que, a las resistencias y recelos lógicos en un conjunto de viejos Estados, han venido a sumarse los efectos de los trascendentales cambios resultantes del hundimiento de los sistemas comunistas.

El proceso de integración comunitaria continuará, porque los problemas reales a los que trata de dar respuesta son importantes y no pueden abordarse, probablemente, de otro modo; las dificultades de los acuerdos de Maastricht acabarán superándose; y la Comunidad conocerá, en la segunda parte de la década, una ampliación considerable con el acceso de un conjunto de países, liberados de las ataduras de la guerra fría, que tenderán a desplazar el centro de gravedad del área hacia el Norte. Este es un punto de la mayor

importancia para los países del Sur. El significado de los acuerdos de Maastricht es principalmente político; las exigencias económicas que de ellos derivan no son, en sí mismas, muy importantes, puesto que cada país comunitario podrá decidir si realiza o no realiza los esfuerzos necesarios para cumplir las condiciones establecidas para acceder a la Unión Económica y Monetaria. Ahora bien, los países que no quieran hacer ese esfuerzo y queden al margen del nuevo avance en el proceso de integración cuando ese paso se dé finalmente, habrán de renunciar a desempeñar un papel relevante en la construcción de la Comunidad Europea. Esta es una perspectiva poco atractiva políticamente y, con seguridad, de un elevado coste económico a largo plazo.

Si los requerimientos derivados de los acuerdos de Maastricht tienen un significado básicamente político, los resultantes de la apertura del Mercado Interior comunitario son más estrictamente económicos y más urgentes. España puede obtener importantes beneficios del Mercado Interior comunitario, pero sólo si es capaz de mantener grados adecuados de competitividad y de atractivo para la inversión; en otro caso, el Mercado Interior puede tener efectos muy negativos para el aparato productivo y el nivel de empleo de nuestro país. Aquí está, en mi opinión, la razón más inmediata y urgente para el reajuste de la política económica, la modificación de los comportamientos de los agentes y la reforma del marco institucional en que esos agentes actúan; aquí, más que en los acuerdos de Maastricht.

La contención y reducción del déficit público es, en estos momentos, la pieza más llamativa de esas adaptaciones: es necesaria para conjurar extrapolaciones prohibitivas de la evolución de las cuentas públicas hacia el futuro; lo es para dar mayores márgenes de holgura al sector privado, y lo es para restablecer la credibilidad de la política económica española en el clima de incertidumbre generado por el referéndum danés. Las medidas recientemente adoptadas por el Gobierno para frenar el crecimiento del déficit habrán de ser continuadas con actuaciones restrictivas referentes a los Presupuestos del año próximo; esas actuaciones habrán de ser importantes y deberán centrarse, básicamente, en la contención del gasto público -puesto que ahí está el núcleo del problema-. No puede pretender el Banco de España -y menos puedo pretender yo- indicar al Gobierno o al conjunto de las Administraciones Públicas qué criterios han de seguir en el proceso de elección entre alternativas que todo esfuerzo de contención del gasto implica. Sí cabe decir en base a la experiencia, y aunque parezca obvio, que un proceso de restricción del gasto público sólo puede ser eficaz si desciende al detalle de las líneas de gasto y si va ligado a reformas efectivas en la gestión y a modificaciones legislativas en el cuadro de normas que determinan el gasto.

Los problemas de nuestra economía no se limitan, sin embargo, a las cuentas del sector público ni tienen en este último su único origen. La sociedad española tiene que comprender que existen límites a las cargas que pueden depositarse sobre los Presupuestos públicos, y que esos límites vienen impuestos por las posibilidades efectivas de financiación y por los efectos de esas cargas sobre el funcionamiento de la economía. Sería excelente que el Estado pudiera prevenir y cubrir todos los riesgos de infortunio de los ciudadanos sin incurrir en déficit insostenibles y sin afectar negativamente a los estímulos y las fuentes del crecimiento de la riqueza nacional; pero esa es una aspiración imposible y autodestructiva, por muchos esfuerzos que se hagan en las mejoras de la gestión, en la depuración del gasto y en el reforzamiento de los ingresos. Para poner sólo algunos ejemplos, es importante y urgente mejorar la gestión de la política activa de empleo y de la sanidad pública, pero es igualmente necesario acabar con el fraude y los abusos que hoy se registran en el seguro de desempleo y en la factura de medicamentos, y ello por razones tanto financieras como de ética pública; y es razonable avanzar por el camino de la privatización de empresas públicas rentables, pero es más importante aceptar que el Estado -y, en último término, la sociedad- no pueden mantener, indefinidamente, empresas públicas con pérdidas y sin futuro. Hay, en definitiva, un amplio campo en el que la contención del gasto público está muy relacionada con las actitudes de la sociedad respecto de lo que puede esperarse del Estado.

La sociedad ha de comprender también la importancia que tiene el mantenimiento de unos precios y costes competitivos si nuestra economía ha de mantener e incrementar su oferta productiva y su nivel de empleo en el Mercado Unico comunitario. El Programa de Convergencia elaborado por el Gobierno anuncia un conjunto de "reformas estructurales" encaminadas a modificar el marco institucional dentro del cual desarrollan su actividad amplios grupos de agentes socioeconómicos y de sectores económicos y que entorpecen la flexibilidad y la competitividad del sistema. Es importante la rápida instrumentación normativa de esa parte del programa que ha sido, por lo demás, especialmente bien recibida en la Comunidad.

La moderación del crecimiento de los salarios es una pieza central en la mejora de la competitividad de nuestra economía. El clima de debilitamiento de la demanda y la desaparición de los focos geográficos que han venido irradiando inflación salarial en los últimos tiempos contribuirán a esa moderación. Pero ésta no debería producirse solamente por la actuación de efectos mecánicos sino por la vía de la convicción y el acuerdo. Lo cierto es que las ventajas que nuestro país tenía en costes del trabajo -y que son el resultado de la evolución de los salarios y la productividad- han tendido a desaparecer en los últimos años, con serias consecuencias, bien conocidas, para la localización de empresas en España y para el mantenimiento de la competencia frente al exterior. El tema salarial suele plantearse en relación con la inflación, pero es más relevante hacerlo, en las circunstancias actuales, en términos de empleo, que es la otra cara del mismo problema. El mantenimiento de ritmos fuertes de avance de los salarios, con independencia de la productividad, conducirá a mayores pérdidas o menores creaciones de empleo que las que se registrarían en otro caso -y ello, como pudo comprobarse en el pasado, cualesquiera que sean las normas y procedimientos encaminados a impedirlo-; porque el aumento de los costes del trabajo conduce, a través de la pérdida de competitividad, a ahuyentar la inversión, al cierre de empresas y a la sustitución de trabajo por capital para contener los costes. El paro constituye el problema social más grave que tiene planteado nuestro país; su mejora debería centrar las mayores preocupaciones redistributivas y ser capaz de estimular la disposición al acuerdo y la transacción en todos los ámbitos.

El problema de la competitividad lleva, inevitablemente, al tema, más cercano al Banco de España, del tipo de cambio y de los tipos de interés. Cuando una economía registra desviaciones de costes que deterioran su competitividad, siempre surge la tentación de pedir que la competitividad se restablezca mediante una depreciación del tipo de cambio. La dificultad consiste en que, si las causas básicas del problema no se han corregido, ceder a esa tentación no resuelve los problemas sino que los agrava.

Una depreciación cambiaria incrementa automáticamente los precios de los productos de importación, reduce los salarios reales y pone inevitablemente en marcha un proceso de revisión de precios y rentas que, en economías fuertemente indiciadas como la española, anula rápidamente las ventajas inicialmente conseguidas -en el caso de que esas ventajas fueran importantes en un momento, como el actual, de recesión en la economía mundial-. Considero, por tanto, que lo importante es atacar los problemas básicos de déficit público, inflación y crecimiento de los costes y modificación de los marcos institucionales perturbadores; porque sólo en la medida que se avance en ese proceso será posible una paulatina reducción de los tipos de interés, con sus correspondientes efectos sobre el mercado cambiario, y el paso de la peseta a la banda estrecha del mecanismo de cambios del Sistema Monetario Europeo. Seguir un orden inverso de actuación sólo generaría más dificultades sin aportar beneficio estable alguno. Sería un orden de actuación contrario a la estabilidad que el Banco de España no puede apoyar.

La atención a la estabilidad monetaria es la primera condición para velar por la estabilidad del sistema financiero. Los excesos del pasado período de auge han afectado negativamente, aquí como en otros muchos países, a las entidades de crédito. Tenemos la fortuna de que aquí, y a diferencia de lo que sucede en otras economías, las entidades de crédito pueden abordar la corrección de esos problemas desde posiciones holgadas de solvencia; pero esa holgura no debe hacernos incurrir en la autocomplacencia, cuando es preciso afrontar las consecuencias de una recesión prolongada y del aumento progresivo de la competencia que traerá

consigo la próxima iniciación del Mercado Interior comunitario. En esas condiciones es especialmente precisa una gestión rigurosa y prudente de las entidades de crédito, así como la remoción de los obstáculos institucionales que dificultan su competitividad. Y ello en un mundo que ha registrado cambios profundos en la naturaleza y configuración del negocio bancario, que tiene ahora ante sí un cuadro de riesgos cada vez más complejo. La normativa actual ataca adecuadamente el riesgo de crédito pero hay otros como los de interés y de mercado que adquieren nueva relevancia y son objeto de creciente atención en los ámbitos internacionales, en especial en el comunitario. La interpretación creciente entre banca, negocio de valores y seguros está produciendo, además, una reestructuración profunda del sistema financiero. Todo esto va a requerir en el futuro inmediato la atención del legislador español y de las autoridades supervisoras de modo que se vean reforzadas la eficiencia y solidez de nuestro sistema. En resumen, pueden estar Uds. seguros de que, durante mi mandato, velaré especialmente por que el Banco de España atienda la misión de salvaguardar la estabilidad monetaria que las leyes le confían de modo prioritario y cuide la evolución de la competitividad y la solvencia de las entidades de crédito cuya supervisión le está encomendada. Todo ello deberá de hacerse desde la convicción de que la estabilidad monetaria, la estabilidad de las entidades financieras y la estabilidad del sistema de pagos son temas profundamente interrelacionados.

No quiero cansarles más con mis palabras, Señores Consejeros. Permítanme, sin embargo, recordarles, para terminar, que el Gobierno ha anunciado su propósito de conceder, próximamente, al Banco de España la amplia autonomía prevista en los acuerdos de Maastricht para los Bancos Centrales comunitarios. La independencia de los Bancos Centrales no es una panacea para los problemas monetarios -aunque sólo sea porque éstos están ligados a los presupuestarios-; pero es importante que la defensa de la estabilidad monetaria esté a cargo de una institución independiente, cuya voz enriquezca el debate público sobre los asuntos económicos. La autonomía del Banco requerirá, en todo caso, una nueva institucionalización de sus órganos rectores que amplíe la fundamentación de la toma de decisiones. Así, pues, en espera de la anunciada autonomía y preparándonos para utilizarla en la forma más adecuada a los intereses generales del país, les anuncio mi propósito de potenciar, desde ahora, el papel de este Consejo General. Estoy seguro de que contaré, para ello, con la colaboración de todos ustedes. Muchas gracias.